

El Salvador proceso

informativo semanal

año 10
número 402

septiembre 27
1989

ISSN 0259-9864

centro universitario de documentación e información

- La desestabilización nacional
- Tras la tregua recrudece la guerra
- La reducción del ejército
- Encarnizada represión contra el movimiento laboral
- Problemas en la producción de granos básicos
- Se consolida el proceso electoral en Nicaragua

La desestabilización nacional

A son de letanía, los funcionarios militares y de gobierno han vuelto a lamentar la desestabilización del Estado que presuntamente intentan, y que ni remotamente producen, las marchas populares como la de la semana anterior, que se tornan violentas al resultar dañada o destruida propiedad de tipo público o privado. Al mismo tiempo, los funcionarios policíacos y de gabinete no desperdician la oportunidad para confirmar el derecho de los ciudadanos y organizaciones a manifestarse públicamente, sin que ello degenera en violencia. La queja de los funcionarios no deja de tener razón, y el derecho que recetan y confirman es por cierto pertinente. Pero sólo tienen la mitad de la razón, y el derecho al que tan ponderadamente aluden apenas tiene valor, cuando el país y el contexto en que se dan es El Salvador del gobierno actual.

Como Monseñor Rivera lo denunciara, tanto los sindicalistas que se manifestaron, como los antimotines que los reprimieron se excedieron en sus derechos y atribuciones. Pero el problema no estriba ni se reduce a la falta de moderación de unos y de otros, sino que subyace en causas profundas de sobra conocidas; aunque en el presente caso son motivaciones coyunturales las que más agitan e inducen a este tipo de sucesos. Porque al menos en la historia reciente del movimiento popular, es bastante novedoso (y de frecuencia creciente) el que la causa de la marcha en cuestión fuera en demanda de la libertad de dos sindicalistas de FENASTRAS. Esta semana, un paro de labores en ANTMAG ha tenido por detonante una demanda similar. Así, es pertinente preguntarse si se captura porque se participa en marchas violentas o éstas se producen porque se captura y se reprime sin ley y sin justificación alguna.

La respuesta gubernamental la ofreció el 24 de agosto el coronel Zepeda, mucho antes de que el actual gobierno enfrentara el primer brote de violencia callejera. A juicio del militar, con la grave escalada de capturas de aquel momento (los militares todavía no suelen reconocer torturas y asesinatos de su autoría) no se estaba reprimiendo sino controlando la anarquía generada durante el anterior gobierno. Se trataba, pues, en el mejor de los casos, de prevención intimidatoria o de respuesta extemporánea a un problema que todavía no experimentaba la nueva administración.

Pero no es sólo eso, ni lo peor. Los cuerpos militares y de seguridad siguen capturando sin causa alguna e indiscriminadamente, como lo demuestra el que por regla general las autoridades judiciales liberen a los imputados por falta de pruebas. Con ello la Fuerza Armada da muestras de no saber a quién persigue, y que tampoco le interesa averiguarlo ni

enmendarse de tal conducta; porque sí sabe dónde golpea y a quién intimida. El punto es grave, porque con ello ni siquiera se estaría pretendiendo neutralizar abusivamente presuntas y dudosas vinculaciones subversivas, como es la tesis de la jerarquía castrense, sino que se estaría usando el que haya guerra y desestabilización como excusa para intimidar y coartar los derechos individuales y colectivos de los sectores populares. En efecto, sólo en los meses de agosto y septiembre se ha capturado, no sólo a bases sino a dirigentes sindicales de ASTIRA, AGEMHA, FENASTRAS, ASTTEL, ATRAMEC, ANDES, ANTMAG y se ha acusado de subversión a la dirigente de UNOC, Amanda Villatoro; también se ha encarcelado a militantes de los partidos Demócrata Cristiano y MPSC. Unos 50 estudiantes de la UES han sido detenidos, sin olvidar la infame captura de 12 trabajadores de salud de una iglesia de pobres en la periferia de San Salvador. Además, se produjo un atentado dinamitero contra el local de FENASTRAS, mientras que los cateos a organismos populares y sindicales son verdaderos saqueos que terminan con la incautación de todos los haberes de estas agrupaciones.

Es a la luz de todo lo anterior que debe valorarse si no son en realidad el gobierno y el ejército quienes sin ley y sin tregua desestabilizan al movimiento popular. Y es en tal contexto de persecución, de captura y de saqueo a los organismos populares que los funcionarios piden a éstos una conducta pacífica, normal y democrática, y con descaro les invitan al ejercicio de su derecho a manifestación. Por mucho menos que la captura o desaparición de un sindicalista quemar buses en Europa, donde los ejércitos, al menos desde la época de los nazis, no torturan ni desaparecen, ni capturan a su antojo.

Con esto no se justifica que deba haber violencia callejera ni mucho menos, pero puede servir para poner límites al fariseísmo de militares y funcionarios de gabinete que se escandalizan por la quema de un bus y dan por natural y descontada la represión a los sectores populares. De ahí que resulte tan penosa la cómplice ingenuidad con que gobernantes y legisladores estadounidenses aprueban mayores ayudas militares y policiales en apoyo de un gobierno y un ejército con propósitos y prácticas tan antidemocráticas y antipopulares; aunque lo que quizá se esté premiando y previniendo es que no reaparezca el genocidio, lo que ya es un triunfo para los cánones democráticos salvadoreños. Como informara Moneñor Rivera recientemente, mala es la imagen del gobierno de Cristiani en Europa, en donde mejor conocen los signos y peligros del totalitarismo ultraderechista; y es mala con toda la razón.

Tras la tregua recrudece la guerra

A pesar del ambiente de distensión y desescalamiento de la guerra que el FMLN imprimió a la dinámica nacional durante las dos últimas semanas, la guerra ha seguido su curso, principalmente debido a la ausencia de gestos de buena voluntad para lograr la paz de parte de la Fuerza Armada (FA), cuya cúpula asumió una postura contraria a la actitud de la comandancia general del FMLN, que decretó el cese del sabotaje al tendido eléctrico y telefónico y la suspensión del uso de minas y trampas explosivas a partir del 10 de septiembre, además de una tregua unilateral comprendida entre los días 13 y 23 del mismo mes.

La FA respondió a tales ofrecimientos con declaraciones en las que ponía en duda la sinceridad de los ofrecimientos del FMLN, al considerar que éstos se enmarcaban dentro de su estrategia de ganar prestigio y tiempo para recuperarse del desgaste militar a que lo tiene sometido. Amparado en tales suspicacias frente a la buena voluntad de la guerrilla, el ejército no vaciló en aprovechar la tregua unilateral del FMLN para desarrollar operativos militares de considerable amplitud en zonas de persistencia guerrillera, rechazando la posibilidad abierta por el Frente de desescalar la guerra e iniciar un proceso que conduzca a la pacificación del país.

Sin embargo, a pesar de las valoraciones y estrategias del Alto Mando castrense, lo que se ha demostrado durante las últimas semanas es que buena parte del conflicto bélico es impulsado por el FMLN, ya que a pesar del mantenimiento de los operativos implementados por la FA, ha sido noloria la disminución de la actividad militar en relación a la segunda semana de septiembre, cuando el FMLN mantenía altos niveles de operatividad. Como comprobación de lo anterior, durante las últimas dos semanas la prensa nacional ha registrado 12 combates de encuentro en distintos puntos del país, así como 4 acciones de hostigamiento a puestos y posiciones militares que han sido atribuidos al FMLN, cifras que están por debajo de la mitad de las anotadas para una sola semana comprendida entre el 6 y 13 de septiembre, cuando

se registraron por lo menos 16 acciones ofensivas del FMLN y 3 combates de encuentro, los cuales reflejaban la escasa movilidad de la FA para ese momento.

Dentro de la estrategia de la FA también se ha incluido una campaña de desprestigio, consistente en atribuir al FMLN la autoría de hechos que rompen con las directrices de la comandancia general. Al mismo tiempo que desprestigia, la FA considera que esos hechos justifican la necesidad de no corresponder con actos que promuevan una disminución de la actividad militar. Esta línea de estrategia fue anticipada por el Jefe del Estado Mayor Conjunto, coronel René Emilio Ponce, el día 12, cuando en rueda de prensa afirmó que con la quema de un autobús y los ataques a posiciones militares, perpetrados en los días anteriores, el FMLN demostraba que no estaba dispuesto a cumplir con sus promesas de cesar el sabotaje y los ataques. Las apreciaciones de Ponce fueron desmentidas posteriormente por los presidentes de las empresas nacionales de electricidad y telecomunicaciones, CEL y ANTEL, quienes afirmaron no haberse registrado atentados en contra de sus instalaciones en las dos semanas ulteriores a la suspensión del sabotaje decretado por el FMLN, suspensión que no incluía las unidades de transporte, lo que Ponce parecía desconocer.

Posteriormente, el ejército ha acusado reiteradamente al FMLN de haber violado la tregua unilateral, como a continuación se detalla. Las fuentes militares comenzaron sus acusaciones el día 14, cuando acusaron al FMLN de haber perpetrado un ataque contra posiciones militares ubicadas en la finca Pasadena, de Quezaltepeque, La Libertad, con saldo de 2 guerrilleros muertos y un soldado herido. El siguiente día, y siempre según fuentes militares, el FMLN habría atacado un puesto de la Guardia Nacional ubicado en San Lorenzo, San Vicente, sin que se reportaran bajas. Posteriormente, la FA acusó al FMLN de haber perpetrado hostigamientos en los alrededores de Melapán, Santa Ana, sin que se reportaran bajas, y en los alrededores de Perquín, Morazán, el día 16, resul-

tando en esta última acción un soldado con heridas y otro muerto. El FMLN, por su parte, negó que alguna de sus unidades haya violado la tregua unilateral decretada, según consigna un cable internacional fechado el día 16.

Resulta notorio, por otro lado, que el ejército haya anunciado la continuidad de sus operaciones contrainsurgentes como respuesta a los ofrecimientos de tregua del FMLN, lo cual podría estar evidenciando que todavía existe en la institución armada predominio de visiones guerreristas para la solución del conflicto nacional. Así, el ejército anunció el día 14 mediante comunicado de prensa, la continuidad de operativos militares permanentes en el norte de Morazán, en el área sur de Usulután, en Chalatenango y en el cerro de Guazapa. Además afirmó estar realizando operaciones de vigilancia en las zonas urbanas de las principales poblaciones del país. Es en este contexto que debe interpretarse la actividad militar de estos últimos 15 días, ya que la constante movilización de fuerzas desplegada por el ejército, en definitiva, condujo a una situación de confrontación con fuerzas guerrilleras, que podrían haberse encontrado acantonadas, de cara a respetar la tregua unilateral, pero que se habrían visto obligadas a responder al acoso de la FA para garantizar su seguridad. De tal suerte, la FA no puede afirmar con suficiente seriedad ninguna violación de los ofrecimientos de los rebeldes, porque su mismo accionar estaría incitando a confrontaciones entre ambas partes.

Durante la vigencia de la tregua unilateral, se registraron en total 12 combates de encuentro en 7 departamentos del país, como a continuación se consigna. Según fuentes castrenses, el día 13 se registraron combates en los alrededores de la población de San José Las Flores, en Chalatenango, resultando 2 guerrilleros muertos y otros 2 heridos; otros combates se registraron en la comprensión de Masahuat, Santa Ana, y San Juan Opico, La Libertad, sin que se reportaran bajas; el mismo día se combatió en las cercanías de Perquín, Morazán, donde los combates se prolonga-

ron hasta el día siguiente, registrándose la muerte de 2 guerrilleros y heridas en un efectivo militar. Posteriormente, el FMLN denunció que durante el desarrollo de los combates la Fuerza Aérea (FA) bombardeó varias poblaciones del departamento de Morazán.

En cuanto a destrucción militar y requisa de armas, el ejército reportó el desmantelamiento de 3 campamentos guerrilleros; el día 14 en la jurisdicción de Chirilagua, San Miguel, donde se decomisaron 150 explosivos, y posteriormente en las zonas de Victoria (Cabañas) y Jiquilisco (Usulután), lugares donde fueron decomisados diversos materiales de guerra.

A partir del día 20, según consigna la prensa nacional, se registraron nuevos combates, ahora en San José Guayabal, Cuscatlán, donde la guerrilla atacó un helicóptero UH-1H y causó heridas a 2 soldados; según fuentes militares, los rebeldes habrían sufrido dos bajas mortales. Otros combates se desarrollaron en la zona de San José Las Flores, Dulce Nombre de María y Nueva Concepción, las tres poblaciones del departamento de Chalatenango, con saldo de 5 guerrilleros muertos e igual número de heridos.

Los días 21 y 22 se suscitaron combates de encuentro en la jurisdicción de Nuevo Edén de San Juan, San Miguel, donde, según fuentes castrenses, fue desmantelado un campamento guerrillero, y en la jurisdicción de Chirilagua, del mismo departamento; en ambos combates habrían muerto un total de 10 guerrilleros y uno habría resultado herido. Posteriormente, se registraron combates en los alrededores de Suchitoto (Cuscatlán) y Lislique (La Unión), sin que las fuentes castrenses apuntaran el número de bajas sufridas por ambos bandos.

Paralelamente a esta postura belicista asumida por la FA, en Washington, el senado votó el día 20 a favor de aumentar la ayuda militar a El Salvador para 1990 en 5 millones de dólares, alcanzando así el monto de 90 millones. Adicionalmente, los senadores eliminaron restricciones que condicionaban la entrega de esta ayuda a avances en materia de derechos humanos, aprobando un fondo especial

que será utilizado para la tecnificación de los cuerpos de seguridad. Ante ello, la comandancia general del FMLN manifestó que la aprobación de esa ayuda militar no favorece el proceso del diálogo. Por su parte, el Presidente Cristiani afirmó que esa ayuda no afecta en nada al proceso porque el accionar guerrillero es la causa de ese flujo de fondos, de lo cual infería que el FMLN debe suspender sus acciones antes de que se corte tal flujo.

Es claro que el gobierno y la FA no están dispuestos a implementar actos de reciprocidad en lo referente al desescalamiento de la actividad militar, pues la FA, por un lado, mantiene sus operativos militares, y el gobierno, por el otro, no ofrece medidas concretas para desescalar el conflicto o propiciar siquiera su humanización. Pareciera, pues, que a pesar de que el gobierno ha accedido a participar en el proceso de diálogo para negociar la finalización de la guerra, en la práctica sigue aferrado a la vía militar como modo de solución al conflicto, sin cuidarse siquiera de esbozar otras soluciones pragmáticas al problema.

Tal interpretación de la guerra por parte del gobierno, empero, se ha visto cuestionada por el renovado quehacer bélico observado a partir del día 25 en distintos puntos del territorio nacional, y que obedece al despliegue militar realizado por el FMLN con posterioridad al cese de la tregua unilateral. En este marco, ese día los comandos urbanos "Modesto Ramírez" ejecutaron en San Salvador la operación "Libertad a Juan Antonio Díaz", quien se encuentra detenido en la Policía de Hacienda. La operación consistió en un ataque, con fuego de fusilería y granadas, al puesto de vigilancia que la Policía de Hacienda mantiene en un edificio comercial ubicado en la zona norponiente de la capital; y en el "ajusticiamiento" del teniente José Cándido Alfaro, quien era efectivo del mencionado cuerpo

de seguridad.

Al día siguiente, el FMLN dio inicio a la operación denominada "Maniobra Nacional, Alto a la represión, todos por la conquista de la democracia y la paz", desplegada en nueve departamentos del país. Según reportes de prensa, la maniobra habría consistido en 15 ataques a puestos militares con un saldo de 9 guerrilleros y 24 soldados muertos. Según fuentes militares, los ataques de mayor importancia se realizaron en las proximidades de Zacatecoluca (La Paz); el puerto de La Unión, (La Unión), donde el FMLN atacó las instalaciones del Destacamento Militar No. 4; en la cabecera departamental de Chalatenango, donde atacó el Destacamento Militar No. 1; en Texistepeque, Santa Ana; y en dos puntos del municipio de Suchitoto, Cuscatlán. Como resultado de los combates habrían muerto 20 soldados y 9 guerrilleros, mientras que otros 16 efectivos del ejército habrían resultado heridos. Otros ataques se registraron en Chinameca, San Miguel y en un puesto militar ubicado en el centro de acopio de granos básicos, del departamento de Chalatenango, sin que se informara de bajas. Según las mismas fuentes militares, efectivos del ejército interceptaron una columna guerrillera de 150 hombres en jurisdicción de Tejutla, Chalatenango, durante la noche del 25 de septiembre, causándoles 12 bajas mortales y decomisándoles regular cantidad de armamento.

Como lo comprueban estos hechos, gran parte de la dinámica de la guerra encuentra sus orígenes en la operatividad del FMLN, pues en sólo dos días de renovada actividad ha impuesto un mayor grado de intensidad al conflicto, que contrasta con la relativa disminución observada durante la vigencia de la tregua unilateral. La realidad, pues, se encuentra alejada de las interpretaciones de la FA y del gobierno.

La reducción del ejército

El encuentro de diálogo realizado en México entre el 13 y 15 de septiembre recién pasado generó nuevas expectativas de paz (Proceso 401). Tales expectativas se habrían debido más al hecho de que esta vez fuese un gobierno de ARENA el que aceptara sentarse a la mesa de conversaciones con el FMLN, que a las posibilidades objetivas de alcanzar la paz en un futuro cercano que pudieran derivarse de dicho encuentro. Los acuerdos suscritos al término de la reunión de México representan un avance importante en términos de dotar formalmente al proceso de diálogo de "carácter permanente, máxima seriedad, garantías recíprocas y ritmos de trabajo que correspondan a la urgencia que tiene el logro de la paz"; pero ello no garantiza en modo alguno que el proceso vaya a cristalizar en el corto plazo en acuerdos sustanciales para el desescalamiento del conflicto, mucho menos para el cese definitivo de hostilidades, espinoso asunto que habrá de discutirse en la próxima cita, a celebrarse en San José de Costa Rica los días 16 y 17 de octubre próximo.

El optimismo manifestado por los participantes en el encuentro de México y, sobre todo, por el obispo auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, debe, pues, templarse con la realidad. A este respecto, el propio Presidente Cristiani, sin desdeñarse de sus deseos de alcanzar la paz en el plazo más breve posible, manifestó el 19 de septiembre que el proceso de diálogo "no será un proceso fácil". Según Cristiani, "hay dificultades que separan a ambas posiciones, algunos puntos de la propuesta son violatorios de la Constitución Política y no podemos aceptar nada fuera del marco constitucional".

De hecho, el optimismo con que ambas delegaciones salieron del encuentro ha empezado a ceder el paso a un clima de renovada confrontación, el cual podría verse exacerbado adicionalmente por la ofensiva militar que el FMLN ha emprendido una vez concluida la tregua de diez días que decretó con ocasión de la cita de México. El FMLN tiene la convicción de que el gobierno no ha correspondido con gestos palpables a sus muestras de flexibilidad desplegadas para favorecer la reanudación del diálogo. Así, por medio de una carta difundida el 25 de septiembre, enviada a la ONU, a la OEA y a las cancillerías de Europa y América, el FMLN ha acusado al gobierno de Cristiani de no querer negociar seriamente el fin de la guerra. En la misiva, el FMLN denuncia que el Presidente Cristiani y otros funcionarios de su gobierno "mantienen su inflexibilidad, usando la Constitución como argumento". Adicionalmente, el reciente incremento de la asistencia militar aprobado por el senado norteamericano "viene a alentar al sector más duro del actual régimen salvadoreño" y "constituye un rudo golpe a las posibilidades de encontrar una

INCREMENTO: El senado norteamericano aprobó el 20.09 por 82 votos a favor y 18 en contra incrementar de 85 a 90 millones de dólares la asistencia militar al gobierno salvadoreño para el próximo año fiscal. La aprobación estuvo precedida de una encendida discusión sobre si los fondos debían ser condicionados al cumplimiento de ciertas restricciones en materia de derechos humanos. El demócrata Christopher Dodd opinó que condicionar la ayuda "sería asustarle (a Cristiani) un golpe en el plano político, en el preciso momento en que se le debería alentar a continuar", a lo cual añadió que Cristiani "está logrando exactamente lo que hemos tratado de conseguir en los últimos 10 años". Por otra parte, los senadores favorables a imponer restricciones, liderados por el demócrata Patrick Leahy, argüían que ARENA estaba vinculado a los escuadrones de la muerte y aún no ha erradicado las violaciones a los derechos humanos. Al comentar la decisión del senado, el Presidente Cristiani manifestó el 22.09 que ello es el resultado de la confianza que el nuevo gobierno salvadoreño ha ganado en el Congreso norteamericano. Por otra parte, descartó que el incremento de la ayuda militar interfiriera con el desarrollo del proceso de diálogo con el FMLN; y resaltó que cuando el FMLN cese sus hostilidades y se incorpore al "proceso democrático, ya no habrá necesidad de ayuda militar".

CEN: En un comunicado emitido el 21.09, el autodenominado Centro de Estudios Nacionales (CEN) manifiesta que "analizando lo actuado hasta la fecha por el actual gobierno, el CEN considera que es tiempo de rectificar la dirección adoptada para no incurrir en una gran estafa a la voluntad popular, que votó por abrumadora mayoría a favor de un proyecto nacional que brilla por su ausencia en la administración del Presidente Cristiani". Entre otras medidas que el gobierno debería adoptar "de inmediato", el CEN le propone "abstenerse de seguir participando en el proceso de 'diálogo-negociación' iniciado en Contadora por la Internacional Socialista"; impedir la presencia en el país "de una 'fuerza de paz' dependiente de las Naciones Unidas, puesto que ello es lesivo a la soberanía nacional y además favorece la perpetuidad del conflicto"; "rechazar los proyectos desarrollistas de organismos internacionales como el FMI, Banco Mundial, AID, etc., puesto que sólo generan dependencia y nunca soluciones de fondo a la crisis económica, de la cual ellos son responsables en su mayor parte"; "retirar de la función pública a los miembros de la organización FUSADES, apéndice de la AID, que ahora pregonan principios de economía de mercado, cuanto tan sólo unos meses atrás convivía indecentemente con los postulados comunitaristas que el pueblo rechazó".

solución política negociada al conflicto".

En este marco, y de cara al próximo encuentro de Costa Rica, uno de los puntos más difíciles de negociación de la "Propuesta del FMLN para lograr la democratización, el cese de hostilidades y la paz justa y duradera en El Salvador", que la insurgencia llevó a la reunión de México, lo constituye el contenido en el inciso "e" del apartado I, relativo a las "medidas de autodepuración y profesionalización de la Fuerza Armada, que permitan abrir espacios reales a la democratización del país"; y, sobre todo, en el inciso "c" del apartado III: "acuerdo específico para el reconocimiento de un solo ejército nacional y su reducción gradual al tamaño estrictamente necesario para la defensa de la soberanía nacional. Disolución de los cuerpos de seguridad y formación de uno solo bajo mando civil".

Este planteamiento no es en modo alguno novedoso. El FMLN lo llevó ya, incluso más detallado, a la reunión de Oaxtepec, en febrero pasado, cuando discutió con los partidos políticos la posibilidad de postergar las elecciones presidenciales (Cf. ECA 483-484, enero-febrero 1989). En aquella ocasión, entre otras cosas el FMLN proponía la "reducción de las fuerzas armadas a la cantidad de hombres y equipos que tenían en 1978, es decir, unos 12 mil efectivos". Significativamente, el entonces Ministro de Defensa, general Carlos Vides Casanova, admitió la pertinencia de repensar la estructuración y dimensiones de la Fuerza Armada una vez que el conflicto bélico hubiese finalizado. A todas luces, la enorme carga presupuestaria que representa el mantenimiento de un ejército hipertrofiado constituye, junto a las demás exigencias financieras de la guerra, una de las principales causas del enorme déficit fiscal que enfrenta el gobierno salvadoreño, por no mencionar todos los efectos que en términos de descomposición moral y social conlleva la militarización del país. Así pues, el planteamiento del FMLN en relación a este punto, aunque difícil, es en el fondo razonable. Como casi todas las cuestiones a discutir en el proceso de diálogo, tiene más que ver con obstáculos emocionales que constitucionales.

Ciertamente, la desconfianza que aún subsiste en el gobierno y, específicamente, en la Fuerza Armada, frente a las intenciones de diálogo del FMLN, es considerable, como lo muestran las reacciones de rechazo con que la Institución castrense respondió a la tregua unilateral decretada por el FMLN con ocasión del encuentro de México. Asimismo, muchos altos jefes militares no logran todavía asimilar la idea de que la hipertrofia del estamento

militar, favorecida coyunturalmente por la situación de guerra, constituye un problema de primera magnitud que habría que resolver como condición indispensable de un efectivo proceso de pacificación y, a fortiori, de reactivación económica. Una muestra particularmente ilustrativa de esta corriente de opinión al interior de la institución castrense la constituyen las desafortunadas declaraciones vertidas el 14 de septiembre por el viceministro de defensa, coronel Juan Orlando Zepeda, enfatizando que la Fuerza Armada "jamás" aceptará una reducción de su actual estructura orgánica ni la disolución de los cuerpos de seguridad.

Por otro lado, sin embargo, el tabú sobre la Intocabilidad del ejército empieza a ser superado incluso dentro del propio estamento militar. En contraste con el exabrupto de Zepeda, también el sucesor de Vides Casanova al frente de la cartera de Defensa, general Rafael Humberto Laríos, ha declarado, el 22 de septiembre, que la Fuerza Armada está en disposición de reducir sus dimensiones después de "analizar nuestra situación hacia el interior de la Institución para definir cuántos recursos humanos, cuántos efectivos, cuánta tropa es necesaria para cumplir nuestra misión" una vez que se entre en un proceso efectivo de pacificación. En lo que respecta al FMLN, según lo manifestó el comandante Shafik Handal en la última reunión de México, la propuesta de reducción del ejército es "suficientemente flexible", al punto de "dejar las manos libres" a la institución armada para que lleve a cabo esa autodepuración.

En un momento en que el propio vicepresidente Merino, a quien algunos sectores de izquierda consideraban como la pieza que la presunta línea dura de ARENA había colocado en el Ejecutivo para fiscalizar los movimientos de Cristiani, ha empezado a ofrecer reformas a la ley electoral para facilitar la incorporación del FMLN a la lucha política; y en que incluso el presidente de la Asamblea Legislativa, Lic. Ricardo Alvarenga Valdivieso, normalmente tan incomprensivo frente a las exigencias de desescalar el conflicto, habría manifestado su "total acuerdo en que se reforme la Constitución, siempre y cuando se respete el procedimiento establecido en ella", según declaraciones difundidas el 19 de septiembre, no hay por qué perder las esperanzas de que también la Fuerza Armada inicie un proceso de autocrítica y flexibilización que la lleve a reallzar concesiones sustanciales al proceso de pacificación, sin que ello vaya necesariamente en desmedro de su institucionalidad ni de la soberanía nacional.

ARZOBISPO: Tras una gira de tres semanas por Europa y Estados Unidos, el arzobispo de San Salvador, Monseñor Rivera Damas, declaró el 24.09 que la imagen del nuevo gobierno salvadoreño en Europa, particularmente en Alemania, es que en El Salvador se ha producido un retroceso democrático con el triunfo de ARENA. El prelado indicó que "tuve la oportunidad de platicar con el Presidente alemán y otros funcionarios que miran la imagen del gobierno del Presidente Cristiani bastante deteriorada". Por otra parte, en relación al problema de los lisiados del FMLN, manifestó éstos podrían salir del país en los próximos días. Al respecto, explicó que "el gobierno quiere un respaldo legal para dar ese paso, y por eso en estos días está por discutirse un decreto especial en la Asamblea Legislativa, que permitirá la salida de los lisiados". En relación a los incidentes ocurridos durante la manifestación de FENASTRAS el 18.09, expresó: "me parece que tanto los sindicalistas como los antimotines se excedieron y esto puede exacerbar los ánimos". "Pero más grave es aún -añadió- el asesinato masivo de una familia en el cantón Llano Los Patos, de Conchagua, departamento de La Unión, que según nuestras informaciones los autores de tan nefasto crimen habían prestado servicio en la Fuerza Armada".

Encarnizada represión contra el movimiento laboral

GIRA: El Presidente Cristiani partió el 23.09 hacia Londres, en el curso de una breve gira por Inglaterra, Italia y Estados Unidos. La comitiva, presidida por el mandatario, está además integrada por el canciller, Dr. José Manuel Pacas; el Ministro de Economía, Ing. Arturo Zablah; el Viceministro de Planificación, Lic. Ernesto Altschul; y el secretario privado de la Presidencia, Arturo Tona; así como por sus respectivas esposas. El 25.09, Cristiani se reunió en Londres con representantes de diversas organizaciones británicas de ayuda; tras lo cual dialogó, por deseo propio, con una delegación de Amnistía Internacional. El 26.09, se entrevistó por espacio de 45 minutos con la Primer Ministro, Margaret Thatcher. Según una declaración emitida por la oficina de prensa de la señora Thatcher, ésta comunicó a Cristiani "nuestro apoyo a la democracia en América Central" y le deseó "lo mejor en restaurar la paz y la estabilidad a El Salvador". Asimismo, según la declaración, Cristiani y la Thatcher "discutieron el continuo apoyo de Nicaragua y Cuba al FMLN, y sobre el programa de reforma económica de El Salvador, en particular la privatización". En relación a éste y otros puntos de la gestión de ARENA, "la Primera Ministra instó al Presidente a hacer todo lo posible para que obtenga una comprensión amplia para su gobierno y su política".

Durante cuatro meses de gestión gubernamental, ARENA ha configurado, o permitido que se configure, una persistente dinámica de represión e irrespeto a los derechos humanos y laborales de los trabajadores. Según los datos presentados por COACES y UNTS, desde el pasado 1 de junio hasta el 19 de septiembre se habrían ejecutado 141 capturas a miembros de base y dirigentes de organizaciones laborales, cifra que en el mes que transcurre se ha visto sensiblemente incrementada con el registro de más casos de capturas a sindicalistas de los sectores privado, campesino, cooperativo y de empleados públicos; y sobre todo con los violentos incidentes registrados el pasado 18 de septiembre durante una manifestación de protesta por capturas y represión, realizada por la Federación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS).

Aunque el objetivo de la marcha lo constituía básicamente la exigencia de que dos de sus miembros capturados en días anteriores, fuesen liberados, la marcha degeneró en acciones violentas que produjeron la quema de dos unidades del transporte colectivo, una de la ruta 20 y otra de la ruta 42; según los informes de prensa ello produjo la persecución inmediata y ataques con gases lacrimógenos a los manifestantes por parte de los agentes antimotines de la Policía Nacional que, como es costumbre, custodiaban la marcha; ante los incidentes, los manifestantes corrieron a refugiarse en el local de una iglesia evangélica, de donde fueron desalojados más tarde con gases lacrimógenos y luego con la penetración de numerosos agentes al lugar. Según las declaraciones iniciales del director de la Policía Nacional, coronel Carlos Mauricio Guzmán, fueron 61 los manifestantes capturados, de los cuales 32 fueron entregados el mismo día a la delegada del Comité Internacional de la Cruz Roja, Katarina Tool; los restantes quedaron en vías de investigación. Los trabajadores liberados que fueron presentados a la prensa mostraban signos de golpes y aseguran haber sido objeto de diversas torturas. Sin reparos, durante la misma sesión con la prensa, el coronel Guzmán Aguilar declaró que "los cuerpos de seguridad, especialmente la Policía Nacional, actuarán desde hoy sin ninguna contemplación contra los vándalos, proteste quien proteste".

Sin embargo, acciones como éstas hacen inevitable que los comunicados de denuncias y protestas ante éstas y otras capturas a miembros de organizaciones populares sean numerosos y reflejen preocupación porque lo ocurrido en septiembre se inscriba en la escalada de represión que se ha agudizado desde el triunfo de ARENA en las elecciones presidenciales de marzo.

En esta línea, FEASIES, en un comunicado difundido el 20 de septiembre, condena las acciones represivas desplegadas por los cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada, y exige la libertad para 6 capturados de ANTA, 1 de ATRAMEC, 2 de FEDECOOPADES, 5 de UES, 1 de ACC, 12 colaboradores de la clínica parroquial de San Roque, y de los 69 capturados de FENASTRAS. A este tipo de denuncias se han unido los comunicados de COACES, ATCEL, y del SITINPEP, el 20; del SETA, y COACES, el 21; y de UNTS, CDHES, CJC, ANTA y FENASTRAS entre los días 22 y 23. A éstos se unen al menos tres comunicados más firmados por gran número de religiosos, sindicalistas, maestros y/o miembros de organizaciones humanitarias de Estados Unidos, que han mostrado expresamente al Presidente Cristiani su preocupación frente a tales hechos, y su exigencia de que cese la represión.

Los cuerpos de seguridad han intentado justificar esta última ola de capturas con una intensa campaña propagandística sostenida por frecuentes comunicados de prensa, a través de los cuales notifican a los medios de comunicación la captura de miembros de organizaciones laborales acusados de pertenecer a las organizaciones miembros del FMLN, de portar material bélico y de participar en "acciones subversivas". Tal fue el caso del directivo de ANTMAG, José Antonio Serrano, acusado de pertenecer a las FARN. Análogo proceso ha llevado la captura de Mario Alberto Palencia y Olga Marina Sol, dirigentes de FENASTRAS, detenidos en base a la acusación de pertenecer también a las FARN, poseer material bélico y participar en acciones violentas. En el mismo proceso, la Guardia Nacional consignó el 21 de septiembre al juzgado Quinto de lo Penal a los dos miembros de FENASTRAS arriba citados y a uno más, junto a cinco trabajadores de la fábrica "Santa Mercedes".

La UNTS, por su parte, publicó el día 22 un comunicado titulado "mientras Cristiani habla de paz, se incrementa la guerra contra los trabajadores y la población civil", en el cual demanda del mandatario que en su calidad de comandante general de la Fuerza Armada ordene la liberación de los 141 detenidos en lo que va de su gestión presidencial hasta el 19 de septiembre, fecha en que le fue remitida por esta organización un listado de los capturados.

Tal situación de represión, aunque como en otros lugares se ha dicho, puede que no sea atribuible ni esté bajo la decisión del Presidente Cristiani, parece corresponderse a lo que ha sido la ideología y, más en general, el *modus operandi* de ARENA. Si, en todo caso, Cristiani está efectivamente en incapacidad de controlar tal situación, entonces su gestión se vería arrebatada por lo que constituyó para la gestión democristiana anterior uno de sus grandes límites, a saber, la escisión entre el poder real detentado por las fuerzas antidemocráticas del país y el poder formal atribuido al Ejecutivo.

ONUCA: En su última escala de una gira por los cinco países centroamericanos, la misión internacional que busca la constitución de un grupo de observadores de la ONU para Centroamérica (ONUCA) inició el 20.09 visitas a diversas zonas conflictivas de El Salvador. La misión, presidida por el general brasileño Pericles Ferreira, arribó el 19.09 a San Salvador, donde se reunió con el canciller Manuel Pacas Castro y con el Ministro de Defensa, Gral. Rafael Humberto Larios, para preparar el itinerario de la misión. Por su parte, el Presidente Cristiani ofreció "todas las garantías y facilidades" a la misión, en la cual figuran asesores, jefes de aviación y de la marina de España, Suecia, Irlanda, Canadá, Venezuela, Colombia, Perú e islas Fidji. El 20.09, la misión procedería a un reconocimiento "logístico y operacional" de la infraestructura que permitirá a "grupos móviles de observación" de la ONU verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz en cuanto a la no utilización del territorio de un país para agredir a otro y la no asistencia a grupos armados irregulares. Según Ferreira, los sitios de mayor interés para la ONUCA serían los bolsones fronterizos con Honduras y el Golfo de Fonseca. El 22.09, la misión partió a Nueva York, para rendir al secretario general de la ONU un informe sobre la gira.

Problemas en la producción de granos básicos

Informes divulgados durante la última semana dan cuenta de los serios daños que las lluvias y la plaga de chapulín estarían ocasionando a la cosecha nacional de granos básicos 1989-1990. Todo parece indicar que estos fenómenos naturales provocarían una drástica reducción en la cosecha que tendrá a fuerza que manifestarse el próximo año en una escasez de dichos productos que presionaría por un mayor aumento en el nivel de precios interno y en el monto de las importaciones.

Según la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), hasta el 25 de septiembre la plaga de chapulín habría arrasado 72 mil manzanas, lo cual se traduciría en términos de producción en la pérdida de 72,339 quintales de maíz, 51,733 quintales de maicillo, 4,986 quintales de frijol y 43 mil quintales de arroz. Las zonas más afectadas por la plaga serían los departamentos de La Unión, San Miguel y Usulután.

Por otra parte, los agricultores de la zona oriental del país han pedido al gobierno que dicha zona sea declarada "zona de desastre" y que sean tomadas las medidas de emergencia para ayudar a los productores que han sido afectados por las inundaciones de sus cultivos provocadas por las fuertes lluvias de las últimas semanas. Concretamente, el Comité Pro Defensa del Sector Productivo de la Zona Oriental informó el 21 de septiembre que las inundaciones han afectado alrededor de 9 mil manzanas cultivadas de algodón, maíz y maicillo a raíz del desbordamiento del Río Grande de San Miguel.

Estas informaciones preliminares de la pérdida de cosechas indican que las metas de producción de granos básicos proyectadas dentro del Programa Económico del gobierno del Presidente Cristiani difícilmente serán alcanzadas, ya que a las deficiencias inherentes a su política de producción de granos básicos se suman ahora los efectos de dos fenómenos naturales hasta cierto punto fuera de la previsión y control del manejo de política económica.

En el área de producción de granos básicos, el

Programa Económico gubernamental identifica como principales problemas de dicho sector los siguientes factores: 1) desequilibrio entre producción nacional y demanda efectiva; 2) producción en manos de pequeños agricultores que muchas veces no son sujetos de crédito; 3) uso de tierras marginales que utilizan técnicas de producción inapropiadas; y 4) canales de comercialización desfavorables al agricultor que le proporcionan un escaso margen de ganancia y significativas pérdidas post-cosecha.

A partir de este diagnóstico, el Programa Económico propone el logro de cuatro grandes objetivos: 1) lograr un nivel adecuado de abastecimiento interno, disminuyendo la necesidad de efectuar importaciones; 2) mantener los precios a niveles accesibles para la población a través del mejoramiento de los canales de comercialización; 3) contribuir a mejorar la situación de ocupación y del

CUADRO N° 1
El Salvador: Metas de producción agrícola de la cosecha 1989/90

Productos agrícolas	Area cultivada (manzanas)	Producción (quintales)
Granos básicos		
Maíz	403,213	13,336.0
Frijol	97,960	1,273.5
Arroz (granza)	19,993	1,279.5
Maicillo	180,141	3,422.7
Frutas, hortalizas y verduras	37,745	10,073.2
Tradicional de exportación		
Café (oro)	241,000	3,359.0
Algodón (rama)	20,000	760.0
Caña (T.C.)	50,000	2,600.00

Fuente: Ministerio de Planificación, Programa Económico Junio 1989-diciembre 1990.

CUADRO Nº 2
El Salvador: Financiamiento programado para la producción de granos básicos
Cosecha 1989/90

Cultivo	Area a financiar (manzanas)	Porcentaje de área financiada dentro del área total a cultivar (%)	Monto del financiamiento (colones)
Maíz	161,285	40.0	¢279,928,475
Frijol	48,980	50.0	¢ 95,266,100
Arroz	17,994	90.0	¢ 49,482,675
Maicillo	52,241	29.0	¢ 83,585,424
Total	280,500		¢508,163,674

Fuente: Ministerio de Planificación. Programa Económico junio 1989-diciembre 1990.

ingreso en el campo; y 4) mejorar las condiciones de producción mediante la transferencia de tecnología apropiada al cultivo y al almacenamiento. En este sentido, se fija como meta para el año agrícola 1989-90 un incremento del 2.7% en la producción de granos básicos con respecto al año anterior.

No obstante los objetivos y metas del Programa, las medidas concretas tendientes a lograrlos se muestran sumamente débiles, ya que más allá de enunciarse buenos propósitos de mejorar asistencia técnica, promover fabricación de silos domésticos y mejorar los canales de comercialización interna, los factores determinantes para aumentar la producción de granos básicos quedan invariables con respecto a la política agrícola de la gestión anterior, es decir, lo relacionado con el financiamiento y la fijación de precios para el productor directo, que tal como ARENA reconoce, son en su mayoría pequeños agricultores minifundistas de los sectores reformado y no reformado.

Según los datos del cuadro No. 2, se proyecta financiar sólo un 40 por ciento del total de manzanas a cultivarse con granos básicos, lo que contrasta con el financiamiento programado a otras actividades como la producción de caña de azúcar, que espera recibir financiamiento del 100 por ciento de la producción esperada. Asimismo, el Programa señala claramente en su política de pre-

cios que la desregulación y liberalización de precios no operará por el momento en el rubro de los granos básicos que constituyen parte fundamental de la dieta alimenticia de los salvadoreños, ya que es preciso asegurar a la población alimentos básicos no sólo en cantidades suficientes sino también a precios, calidad y pesos adecuados a fin de procurar la estabilidad necesaria en la economía.

El tratamiento en materia de crédito y fijación de precios de garantía que se proyecta dar a los productores de granos básicos contrasta con el problema de aumento en sus costos reales de producción experimentado en los años de la gestión económica del PDC y que con las medidas de liberalización de ARENA han tendido a agudizarse; específicamente a raíz del traslado al mercado extrabancario de las importaciones de fertilizantes y pesticidas. Tales aumentos, dado el nulo poder económico y político de dichos productores, difícilmente podrán trasladarse a los consumidores al estilo que puede hacerlo el sector comercial e industrial.

De esta forma, la estabilidad en el nivel de precios de los granos básicos tenderá a mantenerse a costa de un deterioro en la situación de los pequeños productores, no sólo por las inclemencias naturales sino también por la inadecuada política económica aplicada a dicho sector.

Se consolida el proceso electoral en Nicaragua

CONTRAS: La ONU enviará unos 700 hombres a Honduras para que trabajen en la desmovilización de la contra nicaragüense, informó el 22.09 el Presidente hondureño, José Azcona Hoyo. En Yamales, al oriente de Honduras, se encuentran acantonados unos 13 mil combatientes de la contra dispuestos a entregar las armas "solamente cuando haya paz y democracia en Nicaragua", según han reiterado sus comandantes. El Presidente Azcona cree que los contras podrán ser desmantelados antes de febrero de 1990. "Puede ser que eso suceda, depende de cómo se vayan desenvolviendo las cosas en Nicaragua", expresó, y reiteró que no acepta las posiciones que están adoptando los contras cuando dicen que no entregarán las armas. "Ellos no pueden tomar ese tipo de posiciones porque no están en esa condición; las pueden tomar si se van a Nicaragua y decir allá que no van a desmovilizarse", expresó Azcona. El mandatario hondureño indicó además que "todo va caminando, tal vez no con la velocidad que quisiéramos, pero va caminando"; y aseguró que tiene "mucho fe en que el problema centroamericano se va a resolver y vamos a entrar en una etapa de democracia en todos los países" del área. Los rebeldes antisandinistas deben estar desmovilizados antes del 8 de diciembre, según lo establecen los acuerdos que firmaron el 7 de agosto los cinco Presidentes centroamericanos en Tela, Honduras.

El expresidente norteamericano, Jimmy Carter, se reunió el 21 de septiembre con el Presidente George Bush, para informarle sobre los resultados de su reciente visita a Nicaragua como observador permanente del proceso electoral en marcha. Este encuentro ha resultado muy provechoso para definir la proyectada participación "abierta" de Estados Unidos en la celebración de esos comicios.

Sin duda alguna, el aspecto central de la certificación ofrecida a Bush estribó en la plena convicción del expresidente estadounidense de que "las elecciones serán justas, porque todas las partes están de acuerdo en participar en ellas y ambas partes piensan que ganarán". En este sentido, Carter logró persuadir a Bush para que el planeado financiamiento a la campaña electoral de la coalición opositora (UNO) fuese otorgado de conformidad con lo estipulado por la ley electoral nicaragüense. Bush, por su parte, alentó a Carter para que continuase con sus labores de observación y le solicitó, asimismo, la obtención del beneplácito del gobierno sandinista para permitir la visita de otros observadores estadounidenses.

Ese mismo día, de hecho, el Secretario de Estado, James Baker, visitó el Congreso con la finalidad de pedir formalmente a los legisladores la concesión de 9 millones de dólares para ayudar al desarrollo del proceso electoral. De esa suma, 4 millones se destinarían a la campaña de Violeta de Chamorro; 2 millones serían repartidos entre el resto de partidos opositores; 2 millones más irían a las arcas del Consejo Supremo Electoral; y, finalmente, 1 millón serviría para apoyar a la misión oficial de observadores de la ONU (ONUEN). Según el Secretario de Estado, la asignación de tales fondos estaría justificada en razón de que la celebración de elecciones en Nicaragua "constituye una rara oportunidad para que apoyemos la democratización de una sociedad totalitaria". Para los congresistas, por su lado, la nueva distribución de la asistencia económica es satisfactoria y no encontrará probablemente obstáculos en su aprobación.

Dentro de Nicaragua, el proceso electoral continúa cobrando fuerza. El 25 de septiembre, el Frente Sandinista designó a sus candidatos para Presidente y Vicepresidente. Con mucha anterioridad se daba por descontado que el comandante Daniel Ortega sería postulado para la reelección. No se descartaba, sin embargo, la candidatura del actual Ministro del Interior, Tomás Borge, para la Vicepresidencia, tomando en cuenta la amplia popularidad de que goza en las bases sociales del sandinismo. Con todo,

la persona escogida para acompañar a Ortega resultó ser el escritor Sergio Ramírez, quien es el actual Vicepresidente. Al comentar la selección de Ortega y Ramírez, Barricada manifestó que ambos candidatos representan "la fórmula ideal para barrer en las elecciones y seguir adelante con la profundización del proceso revolucionario". Además, tanto la capacidad y experiencia acumulada por los candidatos, así como su integridad, su trayectoria de lucha y su contacto permanente con el pueblo les permitiría, insiste Barricada, luchar por la continuación en sus cargos.

Desde la perspectiva de la oposición, la selección de los candidatos gubernamentales redundaba en una ventaja, en el sentido de que tanto Ortega como Ramírez serán un "blanco fácil" de atacar a lo largo de la campaña electoral. Al respecto, Virgilio Godoy -candidato a la Vicepresidencia por la UNC- aseguró que dichas candidaturas "son lo mejor que le podía ocurrir a la oposición, porque el pueblo los identifica (a Ortega y Ramírez) como los causantes del desastre en que está inmerso el país".

La dinámica del proceso electoral nicaragüense se irá, pues, intensificando a lo largo de las próximas semanas. Hasta el momento, el proceso se ha desarrollado en el marco de condiciones favorables. Muestra de ello lo constituye el anuncio de la nueva visita a Managua del secretario general de la OEA, Joao Baena Soares, para observar el primer período de registros de volantes. Otro personaje internacional que ha visitado Managua en estos días es el expresidente venezolano, Luis Herrera Campins, quien ha exhortado al gobierno nicaragüense a que lleve adelante los comicios "sin presiones ni ventajismos". Tal exhortación parece responder a las insistentes quejas de la oposición que denuncian al gobierno sandinista por obstaculizarle el acceso a la televisión estatal; y el postergamiento de la prometida amnistía a unos 6 mil reos políticos. La oposición también asegura que el ejército no ha cumplido su promesa de suspender temporalmente el servicio militar obligatorio. A su vez, el ejército asegura que la oposición miente y, por el contrario, sostiene que dentro de sus planes está contemplado el eximir de aquí a febrero a unos 4 mil jóvenes de dicho compromiso con la nación.

El jefe de la misión de la OEA en Managua, Mario González, ha conocido estas quejas de la oposición. En su opinión, tales reclamos no pueden ser considerados como sustantivos de modo que puedan afectar adversamente el desenvolvimiento del proceso electoral.

PARLAMENTO: La Asamblea Legislativa de Costa Rica no aprobó la constitución del Parlamento Centroamericano en los plazos previstos por los acuerdos regionales y el Tribunal Supremo de Elecciones de ese país. Las autoridades electorales fijaron el 27 de septiembre como la última fecha para la aprobación del Parlamento Centroamericano, si se quería que los diputados por Costa Rica fueran elegidos simultáneamente en las elecciones generales del 4 de febrero de 1990. El proyecto, según sondeos privados entre los 57 diputados que integran la Asamblea Legislativa, contaría con 23 votos a favor y 23 en contra, dos permanecían indecisos, dos condicionaban su voto, y siete no quisieron comprometerse. El tratado debía obtener 38 votos para su aprobación en la Asamblea Legislativa. El máximo defensor del proyecto ha sido el Presidente Oscar Arias, promotor del plan de paz para Centroamérica, el cual incluye entre sus mandatos la creación del Parlamento, iniciativa del gobernante de Guatemala, Vinicio Cerezo.

PRESENTACION

El boletín "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significativos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y extranjeras, así como emisiones radiales salvadoreñas e internacionales.

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e Información de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas".

SUSCRIPCION ANUAL

El Salvador	
personal	¢ 50.00
correo	¢ 60.00
Centroamérica y Panamá	\$ 25.00
Norte y Sur América	\$ 35.00
Europa	\$ 40.00
Otras regiones	\$ 45.00

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad Centroamericana y dirigirse a Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575, San Salvador, El Salvador, C.A. Teléfono: 236375 y 240011 Ext. 161 y 191.



Biblioteca Florentino Idoate



166745